



Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

ACTUARÍA DE LA SALA SUPERIOR.

RAJ 1107/2025

JUICIO DE NULIDAD: TJI-71916/2023

ACTOR: JUAN CISNEROS OSORNIO

NÚMERO DE OFICIO: 9237/2025



CIUDAD DE MÉXICO A 07 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO.

- C. COORDINADOR DEL REGISTRO DE VICTIMAS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

P R E S E N T E.

En autos del **RECURSO DE APELACION** al rubro citado, promovido en contra de la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional en el juicio de nulidad que se indica, se dictó **RESOLUCIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN** de fecha **DOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO**, misma que se acompaña a la presente en copia simple constante en 18 hojas. Lo que hago de su conocimiento en vía de notificación, a través de este **OFICIO** en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 17 fracción III y V, 20 y 27 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 56 de la Ley Orgánica que rige a este Órgano Jurisdiccional, ambas, publicadas en la gaceta oficial de la Ciudad de México el día primero de septiembre del dos mil diecisiete, las cuales entraron en vigor al siguiente día de su publicación; así como los artículos 8 inciso 17, 9 fracción V, 16 y 17 fracción IV del Reglamento Interior vigente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Doy fe.

ACTUARIO ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS  
DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

JIER\*







Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1107/2025

JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-71916/2023

PARTE ACTORA:

JUAN CISNEROS OSORIO

AUTORIDAD DEMANDADA:

COORDINADOR DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS DE  
LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A  
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

APELANTE:

COORDINADOR DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS DE  
LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A  
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

MAGISTRADA PONENTE:

DOCTORA MARIANA MORANCHEL POCATERRA

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:

LICENCIADA ADRIANA GONZÁLEZ CARBAJAL

Acuerdo del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia  
Administrativa de la Ciudad de México, correspondiente a la sesión plenaria  
del día dos de abril de dos mil veinticinco.

**RESOLUCIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN NÚMERO RAJ.1107/2025,**  
interpuesto el siete de enero de dos mil veinticinco, por el Coordinador del  
Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la  
Ciudad de México, autoridad demandada en el presente asunto, en contra  
de la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil veinticuatro, emitida  
por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades  
Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal, en el  
juicio de nulidad número TJ/I-71916/2023.

## RESULTANDO

**1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.** Por escrito presentado en la Oficialía  
de Partes de este Tribunal en fecha treinta de noviembre de dos mil

veintitrés, **Juan Cisneros Osorio**, por su propio derecho, demandó la nulidad de:

"La Resolución número de oficio CEA VI/NEGATIVA/005/2023 mediante el cual me niega la procedencia del Ingreso al Registro de Víctimas de la Ciudad de México, bajo el argumento de que no se acredita que se trate de delito de impacto social y/o violación a derechos humanos grave y trascendente del que correspondía conocer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas."

(La parte actora impugna el oficio CEA VI/NEGATIVA/005/2023 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se resuelve su solicitud de ingreso al Registro de Víctimas de la Ciudad de México, determinando que resultaba improcedente toda vez que de los hechos puestos en consideración a la Comisión y que se asociaron a la configuración de un delito de homicidio culposo, dicho delito no es un delito de impacto social y/o violación a derechos humanos grave y trascendente reconocida por alguna autoridad competente).

**2. ADMISIÓN DE DEMANDA.** Mediante acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil veintitrés, el Magistrado Instructor de la Ponencia Dieciséis de la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal, admitió la demanda, así como las pruebas ofrecidas por el demandante y emplazó a la autoridad señalada como responsable para que produjera su contestación a la demanda; asimismo, se requirió a la autoridad demandada que remitiera copia certificada del expediente administrativo, o bien, todas las constancias que sirvieron para emitir el oficio impugnado bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se resolvería con las constancias que integraran el expediente.

**3. CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y DESAHOGO DE REQUERIMIENTO.** A través del proveído del seis de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvo por formulada la contestación de demanda por la autoridad demandada en el presente juicio, en la que se pronunció respecto del acto controvertido, ofreciendo pruebas, planteando causales de improcedencia y defendiendo la legalidad del acto impugnado, asimismo, tuvo por desahogado el

requerimiento realizado mediante proveído de fecha primero de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que se dejó sin efectos el apercibimiento contenido en el mismo.

4. **VISTA PARA ALEGATOS Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN.** Con fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, se emitió el proveído de alegatos y cierre de instrucción, mediante el cual otorgó un plazo de cinco días hábiles a las partes para que formularan alegatos por escrito, precisando que trascurrido dicho término con o sin alegatos quedaría cerrada la instrucción, siendo importante resaltar que ninguna de las partes ejerció ese derecho.

5. **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.** El ocho de octubre de dos mil veinticuatro, la Sala de Primera Instancia dictó sentencia en la que determinó **declarar la nulidad** del acto impugnado. Dicha sentencia fue notificada a la parte actora el seis de noviembre de dos mil veinticuatro, y a la autoridad demandada el dos de diciembre de dos mil veinticuatro, tal como consta en los autos del juicio de nulidad en que se actúa. Del fallo en comento, se desprenden los siguientes puntos resolutivos:

**PRIMERO.-** Esta Sala es **COMPETENTE** para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 31, 27 párrafo tercero, 32 fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 98 y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

**SEGUNDO.- NO SE SOBRESEE** el presente juicio, atento a los argumentos jurídicos expuestos en el considerando II de esta sentencia.

**TERCERO.-** La parte actora acreditó los extremos de su acción; en consecuencia, **se declara la nulidad del acto impugnado**; quedando obligada la autoridad en los términos expuestos en la parte final del Considerando IV.

**CUARTO.-** Se hace saber a las partes, que en contra de la presente sentencia, pueden interponer dentro de los diez días hábiles siguientes al en que surte efectos la notificación correspondiente, el recurso de apelación previsto en el artículo 116 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.



**QUINTO.-** A efecto de garantizar debidamente el derecho humano de acceso a la justicia, en caso de duda, las partes pueden acudir ante el Magistrado Ponente en el presente juicio, para que les explique el contenido y los alcances de la presente Sentencia.

**SEXTO.-** Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el derecho que les asiste para recoger los documentos personales que obren en el expediente, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de que se ordenó el archivo definitivo del asunto, apercibidos que de no hacerlo en el tiempo señalado, se le tendrá por renunciado a ello y podrán ser sujetos al proceso de depuración.

**SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE** y en su oportunidad archívese el presente como asunto concluido.

(La Sala Ordinaria declaró la nulidad del oficio impugnado bajo la consideración de que la resolución impugnada no se encontraba debidamente fundada y motivada, transgrediendo con ello, lo establecido en el artículo 16 Constitucional, toda vez que es la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México quien puede dar el reconocimiento de la calidad de víctima, la cual se toma en consideración las determinaciones del Ministerio Público, y el artículo 4 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, establece la facultad de la mencionada Comisión, para determinar o no la procedencia del reconocimiento de víctimas en términos de dicha Ley, atendiendo a las circunstancias especiales de cada asunto.

Además, si bien, la autoridad demandada sostiene que no se le podía reconocer el carácter de víctima en el Registro en mención al actor, ya que el accionante fue víctima indirecta de un homicidio culposo, por lo que dicho delito no es de alto impacto social, fundado su determinación en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, lo cierto es que dicho artículo únicamente menciona que el servicio de asesoría jurídica de la comisión se brindara a la víctima directa o víctimas indirectas de los delitos de alto impacto social, perdiendo de vista que la parte actora no está solicitando el servicio de asesoría jurídica, sino la inscripción al Registro de Víctimas de la Ciudad de México).

**6. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.** En desacuerdo con el fallo de primera instancia, con fecha siete de enero de dos mil veinticinco, la autorizada de la autoridad demandada en el presente juicio, interpuso el recurso de apelación **RAJ.1107/2025**, de conformidad y en los términos de lo previsto en el artículo 116 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

**7. ADMISIÓN Y RADICACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.** Por auto de fecha trece de febrero de dos mil veinticinco, se admitió y radicó el recurso de apelación por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y de su Sala Superior, se designó como Magistrada Ponente a la Doctora Mariana Moranchel Pocaterra, y se ordenó correr traslado a la parte actora con copia simple de los mismos, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

**8. RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES POR LA MAGISTRADA PONENTE.** Con fecha siete de marzo de dos mil veinticinco, la Magistrada Ponente recibió los autos del juicio de nulidad y del recurso de apelación que se trata.

### CONSIDERANDO

**I. COMPETENCIA.** Este Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el recurso de apelación promovido, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 9, 15 fracción VII y 16 de la Ley Orgánica de este Tribunal, y los diversos 1, 116, 117 y 118 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil diecisiete, vigentes a partir del dos de septiembre de dos mil diecisiete, de acuerdo a lo previsto en el artículo Primero Transitorio de las referidas Leyes.

**II. EXISTENCIA DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.** La sentencia recurrida a través del recurso de apelación materia de análisis es existente, según puede constatarse de las actuaciones del juicio contencioso administrativo TJ/I-71916/2023.

**III. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.** El recurso de apelación RAJ.1107/2025 fue interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en el presente juicio, el siete de enero de dos mil

veinticinco, esto es, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 118 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; lo anterior en razón que, si la sentencia recurrida se le notificó el dos de diciembre de dos mil veinticuatro, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el tres de diciembre de dos mil veinticuatro, dicho término corrió del cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro al ocho de enero de dos mil veinticinco, sin computar los días siete y ocho de diciembre de dos mil veinticuatro por haber sido días inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la precitada Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; asimismo, no se computan los días catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, y los días uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis de enero de dos mil veinticinco, por corresponder al segundo periodo vacacional del año dos mil veinticuatro de este Tribunal.

**IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.** El recurso de apelación **RAJ.1107/2025** es **PROCEDENTE**, toda vez que fue interpuesto por parte legítima, esto es, por el autorizado de la autoridad demandada en el presente juicio, en contra de la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil veinticuatro, emitida por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal, en el juicio de nulidad número **TJ/I-71916/2023**.

**V. AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN.** En el recurso de apelación **RAJ.1107/2025**, la parte recurrente señaló que la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil veinticuatro, dictada en el juicio contencioso administrativo número **TJ/I-71916/2023**, le causa agravio, tal y como se desprende de los argumentos planteados en el oficio que corre agregado en el expediente del citado recurso, los cuales serán analizados posteriormente



sin que sea necesario transcribirlos, en razón de que no es esencial para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número S.S.17, perteneciente a la Cuarta Época, emitida por la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en sesión extraordinaria de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticinco de marzo de dos mil quince, cuyo rubro y contenido es el siguiente:

**AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES A LOS RECURSOS DE APELACIÓN ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-** De los artículos que integran el Capítulo XI del Título Segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, denominado 'De las Sentencias', y en particular el diverso 126 se advierte que las sentencias que emitan las Salas no necesitan formulismo alguno, razón por la cual se hace innecesaria la transcripción de los agravios hechos valer por el apelante, sin embargo, tal situación no exime de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad debiendo para ello hacer una fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hubieren admitido, señalando los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitar a los puntos cuestionados y a la solución de la Litis planteada en aceto al dispositivo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

**VI. RAZONAMIENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.** Este Pleno Jurisdiccional considera importante precisar que la Sala Ordinaria declaró la nulidad del oficio impugnado bajo la consideración de que la resolución impugnada no se encontraba debidamente fundada y motivada, transgrediendo con ello, lo establecido en el artículo 16 Constitucional, toda vez que es la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México quien puede dar el reconocimiento de la calidad de víctima, la cual se toma en consideración las determinaciones del Ministerio Público, y el artículo 4 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, establece la facultad de la mencionada Comisión, para determinar o no la procedencia del

reconocimiento de víctimas en términos de dicha Ley, atendiendo a las circunstancias especiales de cada asunto.

Además, si bien, la autoridad demandada sostiene que no se le podía reconocer el carácter de víctima en el Registro en mención al actor, ya que el accionante fue víctima indirecta de un homicidio culposo, por lo que dicho delito no es de alto impacto social, fundado su determinación en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, lo cierto es que dicho artículo únicamente menciona que el servicio de asesoría jurídica de la comisión se brindara a la víctima directa o víctimas indirectas de los delitos de alto impacto social, perdiendo de vista que la parte actora no está solicitando el servicio de asesoría jurídica, sino la inscripción al Registro de Víctimas de la Ciudad de México.

Lo anterior, se advierte de la lectura de la parte conducente de la sentencia sujeta a revisión, misma que se transcribe a continuación:

**"IV.- ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO.-** Esta Sala después de analizar los argumentos expuestos por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación y, hecha la valoración de las pruebas documentales mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgando pleno valor probatorio a las que obran en autos en original o copia certificada, de conformidad con la fracción I del artículo 98 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se procede al estudio del fondo del asunto.

Cabe señalar que se omite la transcripción de los conceptos de nulidad hechos valer, así como su refutación; en virtud de no existir disposición legal que obligue a éste Órgano Jurisdiccional a transcribir los motivos de inconformidad o agravios expresados en el recurso de reclamación, sin que ello implique afectación alguna a las partes pues los mismo, ya obran en autos; apoyándose para tal efecto, en la Jurisprudencia siguiente:

Época: Cuarta

Instancia: Sala Superior, TCADF

Tesis S.S. 17

**AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES A LOS RECURSOS DE APELACIÓN ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-** De los artículos que integran el Capítulo XI del Título Segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, denominado " De las



Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1107/2025  
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-71916/2023

-9-

Sentencias", y en particular el diverso 126 se advierte que las sentencias que emitan las Salas no necesitan formulismo alguno, razón por la cual se hace innecesaria la transcripción de los agravios hechos valer por el apelante, sin embargo, tal situación no exime de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad debiendo para ello hacer una fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hubieren admitido, señalando los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitar a los puntos cuestionados y a la solución de la Litis planteada en acato al dispositivo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

El actor en el **PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD**, medularmente sostiene que se debe declarar la nulidad de oficio número CEAVI/NEGATIVA/005/2023, de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, pues a su consideración, la autoridad demandada omitió tomar en consideración que existe una sentencia ejecutoriada por un Juez penal en la que se le reconoce el carácter de víctima.

En el mismo sentido, en el **SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD**, el accionante aduce que el oficio en controversia se dictó en contravención al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, al no analizar el caso que nos ocupa desde un enfoque de género y diferencial, valorando, analizando y ponderando las circunstancias particulares de la víctima y el hecho victimizante, así como las circunstancias de vulnerabilidad y el daño producido en la víctima, así como la naturaleza del delito.

En el **TERCER CONCEPTO DE NULIDAD**, el actor señala que se debe declarar la nulidad del oficio impugnado toda vez que la enjuiciada omitió analizar lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, en relación al objeto de dicha normatividad, que es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, estableciendo mecanismos de protección.

Asimismo, en el **CUARTO Y QUINTO CONCEPTOS DE NULIDAD**, el demandante sostiene que se debe declarar la nulidad del acto en pugna, por considerar que la autoridad demandada se basó en el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, al sostener que el delito del que fue víctima el actor, no es de alto impacto social, extralimitándose en el supuesto que señala la propia Ley, pues argumenta que ni la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, ni la Ley Nacional de Víctimas, establecen que para ser objeto a una indemnización, es menester que se trate de delitos de alto impacto social.

Finalmente, en el **SEXTO CONCEPTO DE NULIDAD**, el accionante arguye que la autoridad omitió tomar en consideración que pertenece a un grupo vulnerable como lo es la adultez mayor, aunado a que el Juez Penal, le reconoció la calidad de víctima, por lo que debió declarar procedente su solicitud, atendiendo al principio *pro homine*.

Por su parte, al contestar la demanda, la autoridad demandada en el capítulo correspondiente a **"REFUTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE NULIDAD"**, medularmente sostiene que el oficio en controversia, se encuentra debidamente fundado y motivado; aduce que el actor ya fue debidamente indemnizado por quién resultó responsable de la conducta, al ser condenado a pagar al accionante la cantidad de \$377,450.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por daño moral, así como la cantidad de \$64,443.70 (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.) por concepto de tratamiento psicológico; y un total de \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de gastos funerarios.

Asimismo, sostiene que aún y cuando el actor haya sido reconocido por un Juez como víctima, dicha circunstancia no conlleva a que por sí mismo, adquiere el carácter de víctima en atención a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México; ello, tomando en consideración la naturaleza para la que fue creada dicha Ley; máxime que, de conformidad con la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, en concordancia con la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, debe reunir y valorar la información y documentación remitida, incluyendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante; pues aún y cuando en todos los delitos existen víctimas y victimarios, sería impensable que en cada uno de ellos, las víctimas puedan solicitar ser reconocidas como tal en términos de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México; de ahí que la propia Ley faculte a la autoridad para determinar la procedencia o no del reconocimiento, atendiendo a las circunstancias particulares de cada asunto.

Finalmente rearguye que el actor fue víctima indirecta d un homicidio culposo en el que además de haber sido ya indemnizado por el victimario, dicho delito no califica como un delito de alto impacto social ni como una violación a derechos humanos en la que hubiere incurrido alguna autoridad del fuero común, respecto a los bienes jurídicos tutelados como lo pueden ser un homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, delitos en materia de tortura, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; por lo que en el caso, no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 3, fracciones XVII, XLII y 4 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

Ahora bien, es preciso destacar que dada la estrecha relación que guardan los conceptos de nulidad hechos valer por el actor, por técnica jurídica serán analizados en forma conjunta, ya que no existe impedimento legal alguno para que este Juzgador realice el examen conjunto de los argumentos de agravio expresados en la demanda, a fin de resolver las cuestiones litigiosas planteadas; toda vez que del análisis practicado a los mismos, se advierte que se expresan consideraciones estrechamente vinculadas entre sí, que de otro modo, implicarían repeticiones o reiteraciones innecesarias que bien pueden resolverse en una unidad de estudio que solucione todos los puntos medulares de los planteamientos facilitando su comprensión y su resolución.





Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1107/2025  
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-71916/2023

-11-

Sustenta lo anterior, en aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número VI.2o.C. 1/304, de la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del sexto Circuito, visible en la página mil seiscientos setenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de Febrero de dos mil nueve, y cuyo criterio es compartido por esta Autoridad Jurisdiccional, mismo que es del tenor literal siguiente:

**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.** El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

Precisado lo anterior, después de un análisis exhaustivo a los argumentos de las partes, así como haciendo una valoración de cada una de las constancias que obran en autos, esta Sala considera que en el caso, le asiste la razón al actor, atento a las consideraciones jurídicas siguientes:

En principio, para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, conviene señalar que el actor impugna el oficio número CEAVI/NEGATIVA/005/2023, de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual la autoridad demandada determina improcedente inscribir al actor en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México, por considerar medularmente que, aunque el actor fue víctima indirecta del homicidio culposo de su hija; dicha circunstancia no implica que el actor haya sido víctima de un delito de alto impacto social, que sea susceptible de indemnizarse en términos de la Ley de Víctimas en la Ciudad de México.

Ahora bien, es importante destacar que los artículos 3, fracción XXXVIII, 4, 112, primer y segundo párrafo, 117, fracción VIII, 140, 141, fracción VII, 145, 147 y 149 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, establecen lo siguiente:

"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

(...)

XXXVIII. Víctima: Persona física o colectivo de personas, que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de un hecho victimizante;

XXXIX. Víctima directa: Personas físicas y colectivo de personas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus



bienes jurídicos o derechos como consecuencia de un hecho victimizante;

**XL. Víctima indirecta:** Familiares o aquellas personas físicas dependientes de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella;  
{...}"

"**Artículo 4.-** El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las autoridades siguientes:

I. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento, mediante sentencia ejecutoriada;

II. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento que tiene conocimiento de la causa;

III. El juzgador en materia de amparo; civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

IV. Los órganos jurisdiccionales Internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y

V. La Comisión de Víctimas, que podrá tomar en consideración las determinaciones de:

a) El Ministerio Público;

b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;

d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento."

"**Artículo 112.** Se crea la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, como organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria.

La Comisión de Víctimas tiene como objeto desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el Sistema de Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley."



Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1107/2025

JUICIO DE NULIDAD: TJ/1-71916/2023

-13-

"Artículo 117. La persona titular de la Comisión de Víctimas tendrá las facultades siguientes:

(...)

VIII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión de Víctimas;

(...)"

"Artículo 140. Se crea el Registro de Víctimas de la Ciudad de México como mecanismo técnico y administrativo a cargo de la Comisión de Víctimas, que tendrá a su cargo el proceso de ingreso y registro de las víctimas en la Ciudad de México. Las solicitudes de ingreso en el Registro se realizarán en forma gratuita y, en ningún caso, la persona servidora pública responsable podrá negarse a recibir la solicitud de registro."

"Artículo 141. Para el logro de sus fines, el Registro realizará lo siguiente:

(...)

VII. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el principio de participación conjunta consagrado en la Ley General y en esta Ley;

(...)"

"Artículo 145. La solicitud de inscripción de la víctima no implica su ingreso automático al Registro. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma a dicho Registro y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único, junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato. Para mejorar proveer, la Comisión de Víctimas podrá solicitar la información que considere necesaria a cualquiera de las autoridades de la Ciudad de México, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días naturales."

"Artículo 147. El ingreso de la víctima al Registro, se realizará por la denuncia, la queja o el conocimiento de los hechos victimizantes que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, la Comisión de Derechos Humanos, o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.

Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración.

El Ministerio Público, las y los Defensores Públicos, las Asesoras y Asesores Jurídicos y la Comisión de Derechos Humanos no podrán negarse a recibir dicha declaración y enviar el Formato Único a la

Comisión de Víctimas, de acuerdo a lo establecido por la presente Ley.

(...)

Una vez recibida la denuncia, queja o el conocimiento de los hechos, deberán comunicarla a la Comisión de Víctimas en un término que no excederá de veinticuatro horas.

(...)"

"**Artículo 149.** La Comisión de Víctimas deberá estudiar el caso y, de ser procedente, dar el reconocimiento formal de la situación de víctima. A dicho efecto deberá tener en cuenta los peritajes de las dependencias e instituciones públicas de los que se desprendan las situaciones para poder determinar que la persona que lo ha solicitado, podrá adquirir la situación de víctima."

Los preceptos en consulta establecen que una víctima es aquella persona que, directa o indirectamente, ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de un hecho victimizante.

Prevén que el reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de la ley, se realiza por la determinación de las siguientes autoridades: a) el juez de control o tribunal de enjuiciamiento, mediante sentencia ejecutoriada; b) el juez de control o tribunal de enjuiciamiento que tiene conocimiento de la causa; c) el juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima; d) los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; y, e) la Comisión de Víctimas, la cual podrá tomar en consideración las determinaciones del Ministerio Público; de la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter; de los organismos públicos de protección de los derechos humanos; o, de los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

Establecen que la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México tiene como objeto desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el Sistema de Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esa ley.

Disponen que dicha comisión de víctimas estará dirigida por un titular, el cual tiene la facultad, entre otras, de recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de esa institución.

Respecto al tema del registro de víctimas, los preceptos refieren que tal registro se creó como mecanismo técnico y administrativo a favor de la comisión de víctimas, que tendrá a su cargo el proceso de ingreso y registro de las víctimas en la Ciudad de México. Asimismo, para lograr sus fines, se puede recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el



Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1107/2025  
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-71916/2023

-15-

principio de participación conjunta consagrado en la ley general y esa ley.

Señalan que toda autoridad que tenga contacto con la víctima esté obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración, y una vez recibida la denuncia, queja o el conocimiento de los hechos, deben comunicarla a la comisión de víctimas en veinticuatro horas, siendo que el Ministerio Público, las y los defensores públicos, las asesoras y asesores jurídicos y la Comisión de Derechos Humanos no se pueden negar a recibir dicha declaración y enviar el formato único, de acuerdo a lo establecido por la ley.

Finalmente, establecen que la solicitud de inscripción de la víctima no implica su ingreso automático al registro, pero una vez presentada la solicitud se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único, junto con la documentación remitida que lo acompañe, de suerte que, para mejor proveer, la comisión de víctimas puede solicitar o recabar la información que considere necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante a cualquiera de las autoridades de la Ciudad de México, las que deben suministrarla en un plazo que no supere los diez días naturales.

Hecho lo anterior, la comisión debe estudiar el caso y, de ser procedente, dar el reconocimiento formal de la situación de víctima, tomando en consideración los peritajes de las dependencias e instituciones públicas de los que se desprendan las situaciones para poder determinar que la persona que lo ha solicitado puede adquirir la calidad de víctima.

Esto es, de la interpretación de los preceptos mencionados se obtiene que el reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esa ley, puede ser determinado por: a) el juez de control o tribunal de enjuiciamiento, mediante sentencia ejecutoriada; b) el juez de control o tribunal de enjuiciamiento que tiene conocimiento de la causa; c) el juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima; d) los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; y, e) por la Comisión de Víctimas, la cual podrá tomar en consideración las determinaciones del Ministerio Público; de la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter; de los organismos públicos de protección de los derechos humanos; o, de los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

Es decir, existen diversas formas a través de las cuales se puede reconocer la calidad de víctima de una persona, las cuales se encuentran previstas en el artículo 4 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México; sin embargo, la propia Ley establece la facultad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, para determinar o no la procedencia del reconocimiento de víctimas en términos de dicha Ley, atendiendo a las circunstancias especiales de cada asunto.









Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1107/2025  
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-71916/2023

-17-

desaparición forzada cometida por agentes del Estado, o bien, cometida por particulares.

No obstante lo anterior, la autoridad demandada pierde de vista que en el caso que nos ocupa, el accionante, víctima indirecta del homicidio culposo cometido, no está solicitando el servicio de asesoría jurídica; sino la inscripción al Registro de Víctimas de la Ciudad de México.

Es decir, si la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, no dispone expresamente que para acceder al Registro de Víctimas de la Ciudad de México, es menester ser víctima de delitos de alto impacto social, como lo son el feminicidio, homicidio doloso, secuestro, trata de personas, tortura y desaparición forzada cometida por agentes del Estado, o bien, cometida por particulares; la autoridad no puede utilizar un precepto legal que prevée circunstancias diversas para negar el acceso a tal beneficio, pues ello iría en perjuicio del principio general del derecho: *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*; es decir, donde la Ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir.

Máxime que, se debe atender a la naturaleza y objeto de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, que es justamente garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas de delitos, sin que la Ley distinga entre delitos de alto impacto o en su caso delitos dolosos y culposos, pues si el legislador hubiere querido hacer dicha distinción, lo hubiera previsto en la normatividad aplicable.

En este sentido, resulta a todas luces evidente que, como lo manifiesta el actor, la autoridad demandada emitió una resolución impugnada carente de sustento jurídico, dejando así en completo estado de indefensión al accionante; situación que de igual forma, transgrede el artículo 16 Constitucional, pues acorde al principio de legalidad, se debe garantizar al gobernado la existencia de un Estado de Derecho, motivo por el cual la autoridad no debe actuar de manera arbitraria; no debemos olvidar que todo acto de autoridad debe contener elementos de certeza al gobernado, dicho acto debe constar por escrito, estar debidamente fundado y motivado, emitido por autoridad competente.

En específico, ello implica que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso; es decir, aquel sustento en una disposición normativa de carácter general, ya que es necesario que la ley prevea una situación concreta, para la cual resulte procedente realizar el mismo, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite (fundamentación); y, debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas, a través del señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa (motivación).

Máxime que, además que se cumplan con los requisitos constitucionales de la debida fundamentación y motivación, es necesario que exista adecuación









Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1107/2025

JUICIO DE NULIDAD: TJ/1-71916/2023

-23-

emitida conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, máxime que la solicitud de inscripción no implica el ingreso automático de la víctima al registro, sino que debe valorarse la información y documentación remitido, incluyendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante.

Continúa manifestando que si bien el artículo 4 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, le otorga la facultad para determinar o no la calidad de víctima del actor, lo cierto es que es que se debe allegar de lo ya investigado por autoridades que ti tienen tales facultades, por tal motivo, los agravios de la parte actora son infundados pues el carácter de víctima no lo acredita de manera fehaciente, ni ofrece de manera precisa y concreta los medios de convicción conforme a los cuales se le pueda atribuir dicho carácter.

Asimismo, refiere que la representación social del Ministerio Público determinó que los hechos puestos a consideración de la Comisión se asocian al delito de homicidio culposo, el cual, no califica a efecto de otorgarle el registro en términos del artículo 4 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, el cual señala expresamente que el reconocimiento de la calidad de víctima, por virtud de un delito, se otorga mediante la determinación emitida por el ministerio público, el cual tampoco actualiza en el caso concreto la procedencia del registro, pues la comisión únicamente tiene competencia para conocer de violaciones graves y trascendentes en derechos humanos y delitos de alto impacto social como lo son homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, delitos en materia de tortura, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Así, refiere que solo en caso de que la solicitud de ingreso al registro de víctimas formulado por la autoridad ministerial se trate de alguno de los delitos mencionados de alto impacto social, se debe autorizar el registro, de ahí que la Comisión no está en posibilidad de otorgar el registro al carecer

*del reconocimiento por autoridad competente respecto a establecer que no existe obligación jurídica de inscribir y otorgar el registro a la parte actora.*

Al respecto, a juicio de este Pleno Jurisdiccional el agravio en estudio resulta **infundado**, por las consideraciones de derecho que a continuación se expresan:

En primer lugar, es necesario tomar en consideración lo establecido en los artículos 3 fracción XXXVIII y 4 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, establecen lo siguiente:

"**Artículo 3.** Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
(...)

**XXXVIII. Víctima:** Persona física o colectivo de personas, que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de un hecho victimizante;

**XXXIX. Víctima directa:** Personas físicas y colectivo de personas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de un hecho victimizante;

**XL. Víctima indirecta:** Familiares o aquellas personas físicas dependientes de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella;  
(...)"

"**Artículo 4.-** El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las autoridades siguientes:

I. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento, mediante sentencia ejecutoriada;

II. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento que tiene conocimiento de la causa;

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

IV. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y

V. La Comisión de Víctimas, que podrá tomar en consideración las determinaciones de:



Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1107/2025  
JUICIO DE NULIDAD: TI/I-71916/2023

-25-

- a) El Ministerio Público;
- b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;
- c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos; o,
- d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento."

De los preceptos legales citados se desprende que, para efectos de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, la víctima es la persona física o colectiva de personas que directa o indirectamente han sufrido un daño o el menoscabo de sus derechos producto de un hecho victimizante; y que una víctima indirecta son los familiares o aquellas personas físicas dependientes de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Por otro lado, que el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por medio de diversas autoridades, entre ellas, el juez de control o tribunal de enjuiciamiento, mediante sentencia ejecutoriada, o el que tiene conocimiento de la causa, del juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima, los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y la comisión de víctimas, quien puede tomar en consideración las determinaciones del Ministerio Público, la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca ese carácter, los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

De lo anterior, se destaca que el reconocimiento de la calidad de víctima la puede realizar la Comisión de Víctimas, quien a su vez puede tomar en consideración las determinaciones del Ministerio Público, o el juez de



control o tribunal de enjuiciamiento mediante sentencia ejecutoriada o el juez de control o tribunal de enjuiciamiento que tenga conocimiento de la causa.

En ese tenor, de la revisión a los autos que conforman el presente juicio de nulidad, se advierte el oficio **602/600/2413/2021-04** de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual la Directora del Centro de Apoyo Socio Jurídico a víctimas del delito violento solicitó a la Coordinadora del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que girara sus instrucciones a quien correspondiera a fin de que se llevara a cabo el registro ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México de Juan Cisneros Osornio, víctima indirecta del delito de Homicidio Culposos por Tránsito Vehicular, según los registros que obran en la carpeta de investigación CI-FAO/AO-3/UI-1 C/D/03977/09/20217, iniciada en agravio de María Irene Cisneros Jiménez. Dicha documental se digitaliza a continuación:



**FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
Centro Nacional de Investigación de Delitos de Atención a Víctimas  
Dirección General de Atención a Víctimas  
Centro de Apoyo Socio Jurídico a Víctimas del Delito Violento  
"2020. Año de la Independencia"  
Ciudad de México, 26 de abril de 2021  
602/600/2413/2021-04

**LIC. PERLA HERMINIA GUEVARA PÉREZ**  
COORDINADORA DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS  
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E,  
República de Cuba, número 43, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 4, 6, 7 y 12 de la Ley General de víctimas; 1, 3, 5 y 8 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 25, 66 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Por este conducto y en alcance al oficio **602/600/5462/2020-08**, me permito solicitar a usted que sus instrucciones a quien correspondiera a fin de que se lleve a cabo el registro, ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, del C. Juan Cisneros Osornio, víctima indirecta del delito de homicidio culposos por Tránsito vehicular, según los registros que obran en la Carpeta de Investigación CI-FAO/AO-3/UI-1 C/D/03977/09-20217, iniciada en agravio de María Irene Cisneros Jiménez, por lo que, me permito remitir a usted: copia certificada de la Carpeta de Investigación, acuerdo ministerial, el Formulario Único de Declaración (FUD), acta de nacimiento, certificación oficial y CURP de la víctima indirecta, documentos con los que cuenta esta Unidad Administrativa.

*Para tal efecto se proporcionan los datos personales, mismos que se aportan únicamente para los fines relacionados, con el ejercicio de sus funciones por lo que deben mantenerse bajo la más estricta confidencialidad, fundamentalmente en los artículos 103, fracción I y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 59 párrafo segundo y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del entonces Distrito Federal, en concordancia con el artículo 16 fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales para esta entidad. Solicitando que los datos personales se manejen con la discreción que el caso amerita.*

Sin más por momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE   
**LIC. CLAUDIA FELICIA GARCÍA**  
DIRECTORA DEL CENTRO DE APOYO SOCIOJURÍDICO  
A VÍCTIMAS DEL DELITO VIOLENTO  
DIRECCIÓN



Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1107/2025  
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-71916/2023

-27-

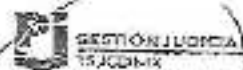
Posteriormente, mediante oficio EJECSUL/AM-4368/2023, de fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, el Director de la Unidad de Gestión Judicial 1, especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, hizo del conocimiento al Coordinador del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, el auto de la misma fecha en la que se solicitó al Coordinador mencionado que informara si la víctima indirecta había quedado inscrito en el Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, apercibido de que en caso de no atender la solicitud se le impondría una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a veinte veces la Unidad de Medida y Actualización.



29-06-2023

Agatz 17:30

COORDINADOR DEL REGISTRO DE VICTIMAS DE LA  
COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS  
DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
PRESENTE.



Carteta de Producción: EJEC-SUL/369/2021.  
SENTENCIADO: LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ  
NEMECIO  
DELITO: HOMICIDIO CIB. POZO  
OFICIO: EJEC-SUL/AM/466/2020  
Ciudad de México, a 21 de junio de 2023.


Por medio del presente, hago de su conocimiento que el día de la fecha, dentro de la carpeta citada al rubro, se emitió el siguiente auto:

“A U T O.” En la Ciudad de México a 24 de Junio de 2023.

Se tiene por recibido el recibo a que hace referencia la intervención que antecede, ordenándose agregar el documento a la presente Carpeta de Eleonidia para que corra como corresponde.

En su turno al comparendo, se le dio a la Licenciada Ena Mirreya Sánchez, Asesora Jurídica Pública adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, informando que atendiendo lo solicitado por el Licenciado Edgar Alejandro Gómez Jiménez, Coordinador del Registro de Víctimas Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, se hizo entrega del formato único de declaración, acta de nacimiento y el acta única de registro de nacimiento. Que víctima indagada Juan Cisneros García y toda vez que mediante el preaviso de sala de junio del presente año, se le remitió copia autorizada de la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2020, emitida por el Coordinador del Registro de Víctimas Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, a fin de que informe en el plazo de 60 días hábiles, al víctima indagado Juan Cisneros García lo quedó inscrito en el Registro de Víctimas Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México; apercibido, en caso de no atender la solicitud, se le impondrá una multa de moroso, consistente en un multa equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización con fundamento en el artículo 104 fracción II inciso f) del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ASILACORDO Y FIRMA LA JUEZ ESPECIALIZADA EN EJECUCIÓN DE SANCIONES  
PENALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO DOCTORA EN DERECHO ALEA ROCÍO MEDINA  
ESPINDOLA...


**DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL**  
**ESPECIALIZADA EN EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES**  
 DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 A. VINOZ MA. MRO. JESÚS ARMANDO CARRÓN CASTAÑO



Así las cosas, la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, debió tomar en consideración la determinación del juez o tribunal de enjuiciamiento que tenga conocimiento de la causa, en este caso, de que al actor en el presente juicio ya se le ha reconocido como víctima indirecta del delito de Homicidio Culposos por Tránsito Vehicular, por el fallecimiento de su hija, máxime que se le solicitó directamente al Coordinador del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México que realizara el registro ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México de Juan Cisneros Osornio, parte actora en el presente asunto.

Así, contrario a lo que manifiesta la autoridad demandada en el presente asunto, el reconocimiento de la calidad de víctima ya se le había otorgado desde la sentencia ejecutoriada de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se le reconoció como víctima indirecta, tal como lo establece el artículo 3 fracción XXXVIII de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

Además, en el oficio de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, la Directora del Centro de Apoyo Socio jurídico a víctimas del delito violento solicitó a la Coordinadora del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que girara sus instrucciones a quien correspondiera **a fin de que se llevara a cabo el registro ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México de Juan Cisneros Osornio**, víctima indirecta del delito de Homicidio Culposos por Tránsito Vehicular, según los registros que obran en la carpeta de Investigación CI-FAO/AO-3/UI-1 C/D/03977/09/20217, iniciada en agravio de María Irene Cisneros Jiménez, por lo que, en el presente caso se actualiza la hipótesis normativa establecida en el artículo 4 fracción II de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, pues el juez que tuvo conocimiento del asunto en particular, le reconoció la calidad de víctima indirecta, lo cual se



Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1107/2025  
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-71916/2023

-29-

corroborar con el oficio del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, mencionado.

En ese tenor, no es jurídicamente acertado que se niegue la inscripción del actor al Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, en razón de que no existía documental que le acreditara el carácter de víctima, pues como se ha dicho, en autos existen diversas documentales con las que se acredita la calidad de víctima indirecta del actor, en relación al delito de homicidio culposo de su finada hija de la cual dependía al ser un adulto mayor, así como también se acredita que se le solicitó al Coordinador del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México que girara sus instrucciones para que llevara a cabo el registro ante la mencionada comisión del actor.

Por otro lado, en cuanto a sus manifestaciones de que la *representación social del Ministerio Público determinó que los hechos puestos a consideración de la Comisión se asocian al delito de homicidio culposo, el cual, no califica a efecto de otorgarle el registro en términos del artículo 4 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, el cual señala expresamente que el reconocimiento de la calidad de víctima, por virtud de un delito, se otorga mediante la determinación que emita el ministerio público, motivo por el cual tampoco se actualiza en el caso concreto la procedencia del registro, pues la comisión únicamente tiene competencia para conocer de violaciones graves y trascendentes en derechos humanos y delitos de alto impacto social como lo son homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, delitos en materia de tortura, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.*

Al respecto, a juicio de este Pleno Jurisdiccional dicha manifestación es infundada, pues contrario a lo que señala el objeto de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas, reconocer y garantizar los derechos de la víctimas del delito

LAJ.1107/2025



11/07/2025

Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal, en el juicio de nulidad **TJ/I-71916/2023**, conforme a lo precisado en el Considerando I de esta resolución.

**SEGUNDO.** El **primer y segundo** agravios planteados por la autoridad recurrente en el recurso de apelación **RAJ.1107/2025**, resultaron **infundados** para revocar la sentencia de primera instancia, de conformidad con los motivos y fundamentos legales que se precisan en el Considerando **VII** de esta resolución.

**TERCERO.** Se **confirma** la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil veinticuatro, pronunciada por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal, en el juicio de nulidad **TJ/I-71916/2023**.

**CUARTO.** Para garantizar el acceso a la impartición de justicia, se hace saber a las partes que, en contra de la presente resolución, podrán interponer los medios de defensa que resulten procedentes en la Ley de Amparo; asimismo, se les comunica que, en caso de alguna duda en lo referente al contenido del presente fallo, podrán acudir ante la magistrada ponente a efecto de que les sea informado el sentido y alcance de esta resolución.

**QUINTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.** Con copia autorizada de la presente resolución, devuélvanse los autos del juicio de nulidad **TJ/I-71916/2023** a la Sala de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente del recurso de apelación **RAJ.1107/2025**.

**SIN TEXTO SIN TEXTO**

**SIN TEXTO SIN TEXTO**





Tribunal de Justicia  
Administrativa  
de la  
Ciudad de México

## Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México



PA-002915-2025

467 - RAJ.1107/2025 - APROBADO		
Convocatoria: C-13/2025 ORDINARIA	Fecha de pago: 02 de abril de 2025	Puntaje: 88 Puntaje 7
No. Juicio: TJJ-71916/2025	Magistrado: Doctora Mariana Moranchel Pocaterra	Página: 35

ASÍ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS Y LOS MAGISTRADOS PRESENTES, LO RESOLVIÓ EL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO INTEGRADO POR LOS D.C. MAGISTRADOS LICENCIADO JOSÉ RAÚL ARVIDA REYES MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE, EN VIRTUD DE LA AUSENCIA DE LA MAGISTRADA DOCTORA ESTELA FUENTES JINENEZ, LICENCIADA LAURA CIVILIA ACEVES GUTIERREZ, DOCTOR JESÚS ANILÉN ALUJÁN, MAESTRO JOSÉ ARTURO DE LA ROSA PEÑA, IRVING ESPINOSA BETAÑOZ, MAESTRA REBECA GÓMEZ MARTÍNEZ, DOCTORA MARIANA MORANCHEL POCATERRA, DOCTORA XÓCHITL ALJENKORA HERNÁNDEZ TORRES Y EL LICENCIADO ANDRÉS ÁNGEL AGUILERA MARTÍNEZ.

FUE PONENTE EN ESTE RECURSO DE APELACIÓN LA C. MAGISTRADA DOCTORA MARIANA MORANCHEL POCATERRA.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 5, 9, 15 FRACCIÓN VII, 16, 48 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 16 FRACCIONES I Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 116 Y 117 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTES A PARTIR DEL PRIMER DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

POR ACUERDO TOMADO POR LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO JURISDICCIONAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, FIRMAN LA PRESENTE RESOLUCIÓN EL MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE LICENCIADO JOSÉ RAÚL ARVIDA REYES, ANTE EL C. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "A. QUINCE A.", QUINCE A.

MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE



MAG. LICENCIADO JOSÉ RAÚL ARVIDA REYES

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "A"

ATTO. JOAQUÍN BARRIENTOS ZAMUDIO

EL MAESTRO JOAQUÍN BARRIENTOS ZAMUDIO, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "A" DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE PÁGINA ES PARTE INTEGRANTE DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1107/2025 DERIVADO DEL JUICIO DE NULIDAD: TJJ-71916/2025, PRONUNCIADA POR EL PLENO JURISDICCIONAL DE ESTE TRIBUNAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO, CUYOS PUNTOS RESOLUTIVOS SE TRANSCRIBEN A CONTINUACIÓN: PRIMERO. Este Pleno Jurisdiccional es competente para conocer y resolver el recurso de apelación RAJ.1107/2025, interpuesto por la autoridad demandada por medio de su representante, en contra de la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil veinticinco, pronunciada por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derivada a la Quarta Administración de este Tribunal, en el juicio de nulidad TJJ-71916/2025, conforme a lo prescrito en el Considerando I de esta resolución. SEGUNDO. El primer y segundo agravios planteados por la autoridad demandada en el recurso de apelación RAJ.1107/2025, resultaron infundados para revocar la sentencia de primera instancia, de conformidad con los motivos y fundamentos legales que se precisan en el Considerando VI de esta resolución. TERCERO. Se confirma la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil veinticinco, pronunciada por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derivada a la Cuarta Administración de este Tribunal, en el juicio de nulidad TJJ-71916/2025. CUARTO. Para garantizar el acceso a la administración de justicia, se hace saber a las partes que, en contra de la presente resolución, podrán interponer los medios de defensa que establecen precedentemente en la Ley de Amparo, siempre, se los comunica que en caso de alguna duda en lo referente al contenido del presente fallo, podrán acudir ante la magistrada ponente a efecto de que les sea informada al respecto y dadas de esta resolución. QUINTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Con copia autorizada de la presente resolución, procédase a dar cumplimiento al juicio de nulidad TJJ-71916/2025 a la Sala de origen y, en su oportunidad, archivar el expediente del recurso de apelación RAJ.1107/2025.

